
Las relaciones Estados Unidos, México, Centroamérica: ¿un triángulo conflictivo?

María Rosa García
Richard A. Nuccio

Como parte de sus críticas a la política latinoamericana de la administración Carter, durante la campaña electoral, Ronald Reagan preguntaba en alguna ocasión a su audiencia, “¿Debemos dejar que Granada, Nicaragua (y) El Salvador se conviertan en otras Cubas, en nuevos puntos de avanzada para brigadas soviéticas armadas? ¿Se extenderá el próximo avance del eje Moscú-La Habana hasta Guatemala y luego a México, y, rumbo al sur, a Costa Rica y a Panamá?”¹ Estas preguntas aún preocupan a la administración Reagan y constituyen la base de su enfoque hacia Centroamérica. Todos los indicios revelan que en el momento actual Reagan cree, tanto como entonces en la teoría de dominó. En este sentido parece que cada evento del proceso de cambio llevado a cabo en esa zona entrará en la balanza de competencia soviético-norteamericana. Así, la prueba esencial para esta administración, que califica si un gobierno debe merecer apoyo u oposición es su postura frente al conflicto global con la Unión Soviética.

El liderazgo actual norteamericano percibe que E. U. ha entrado en un periodo peligroso de inferioridad militar *vis-a-vis* la URSS. Dicho momento crítico —desde su punto de vista— no permite experimentos sociales o reformas básicas que puedan disimular las actividades o el objeto de la subversión de fuerzas “comunistas.” Algunos partidarios de este punto de vista, como la embajadora en la ONU, Jeane Kirkpatrick, han llevado a cabo un

¹ Véase William Leo Grande, “Una nota crítica sobre la política exterior de Ronald Reagan”, en *Cuadernos Semestrales*, No. 9, C.I.D.E., México, Primer Semestre, 1981, p. 149.

gran esfuerzo intelectual para justificar el apoyo a los regímenes dictatoriales que son considerados como los "aliados leales" en la lucha anticomunista. Estos razonamientos tienen semejanza con un antiguo y famoso planteamiento de John F. Kennedy referente a la República Dominicana que señalaba que la política norteamericana estaba en contra de las dictaduras tanto de derecha como de izquierda y a favor de los gobiernos moderados y demócratas. Pero que, hasta que se asegurara la segunda opción, el interés nacional se orientaría a apoyar a las de derecha.

Kirkpatrick y otros asesores de Reagan tienen una versión más sofisticada de este planteamiento, por la cual distinguen entre regímenes "totalitarios" y "autoritarios". Los totalitarios— los países "comunistas"—son los que no gozan de ningún tipo de libertad. Los autoritarios, en particular, los moderadamente autocráticos, se presentan como aquéllos que permiten la libertad de religión, de tránsito y, desde luego, la de ejercer actividades empresariales. Los regímenes totalitarios, una vez instalados, nunca regresan al "camino democrático". Los autoritarios, sin embargo, una vez superados los problemas de "modernización", pueden evolucionar hacia la democracia, mientras tanto, lo importante para ellos, es el mantenimiento del orden, de la estabilidad y del principio de autoridad. Por eso, la posición de E.U. se encuentra justificada cuando apoya a tales regímenes, si éstos son leales y anticomunistas.²

Este análisis de la embajadora Kirkpatrick es una lectura equivocadamente trágica de los regíme-

² Jeane Kirkpatrick, "Dictaduras y duplicidad de criterios", *Contextos*, 2-8 de abril de 1981, pp. 6-23.

nes autoritarios latinoamericanos, pero sirve para justificar una alianza entre E.U. y algunos de éstos, que se encontraban particularmente preocupados por la política de los derechos humanos de Carter en América Latina.³

Los comentarios de Reagan y de sus consejeros carecen de una concepción elaborada del proceso del cambio en el Tercer Mundo. Esto es aún más sobresaliente si la clave de la política norteamericana para el resto de este siglo es el entendimiento del fenómeno de revolución. Sin embargo, las administraciones Republicanas han asumido generalmente una inercia en la política latinoamericana y han sido frecuentemente sorprendidas por la aparición de nuevos procesos históricos y nuevos actores que alteran el precario orden social prevaleciente en muchos países de la región.⁴

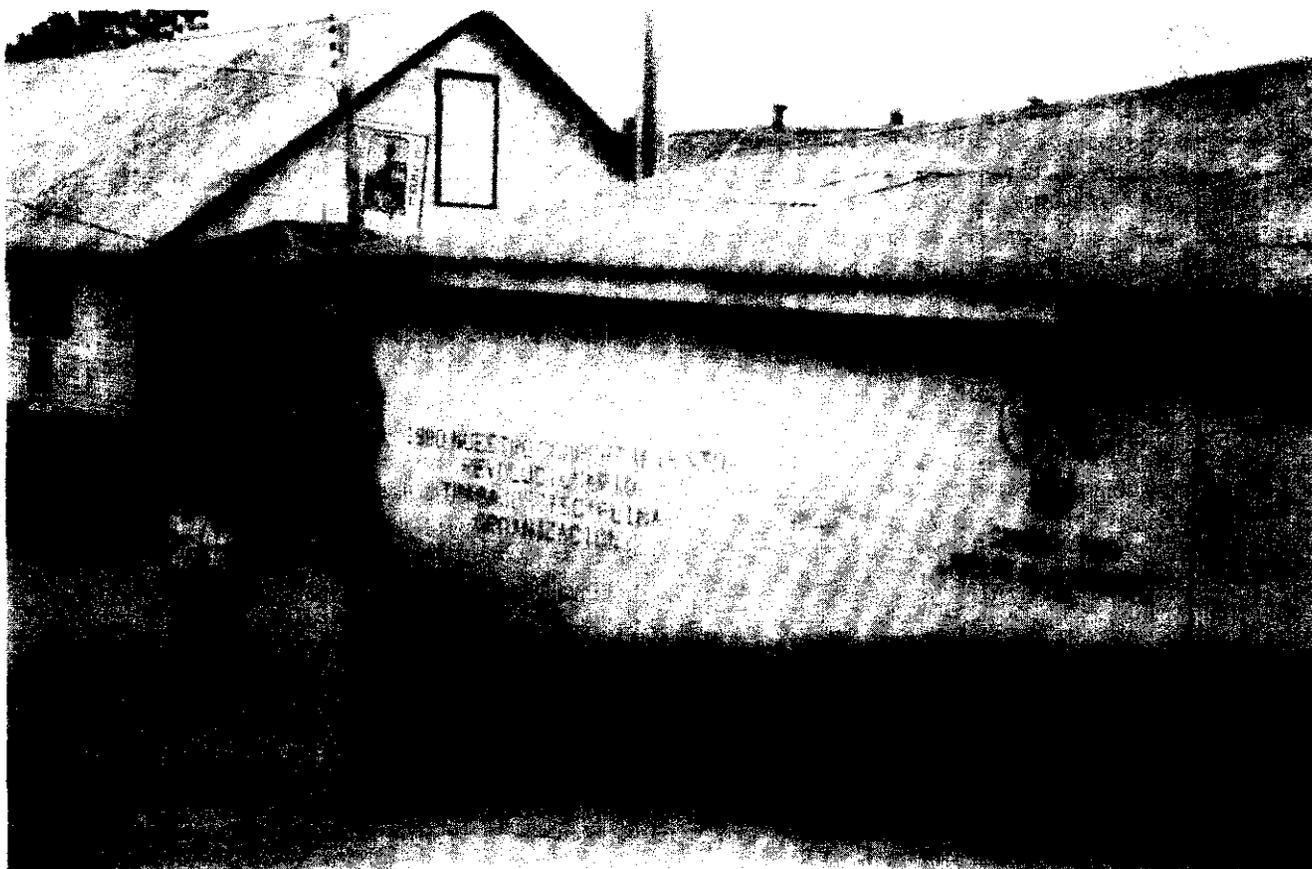
Esta hostilidad al proceso de cambio coincide con la creencia de Reagan que "la URSS se encuentra detrás de toda la agitación existente. Si no estuvieran empeñados en este juego de dominó, no existiría ningún punto de crisis en el mundo". Así, en Centroamérica, es el apoyo militar y no las reformas sociales lo que será impulsado por la administración. Las políticas actuales hacia Nicaragua y El Salvador son ejemplos claros que equiparan el cambio con el comunismo y responden a las demandas reformistas con balas. La asistencia económica a Nicaragua ha sido suspendida y hay rumores del inicio de un intento de "desestabilizar" al go-

³ Tom J. Farer, "Reagan y América Latina", *Ibid.*, pp. 24-33.

⁴ Luis Maira, "América Latina, pieza clave en la política de contención de la administración Reagan", en *Cuadernos Semestrales*, No. 9, C.I.D.E., México, Primer Semestre, 1981, p. 217.

bierno siguiendo un modelo similar al aplicado con el gobierno de Allende. El Departamento de Estado reunió los materiales del ahora famoso "Libro Blanco", intentando establecer a El Salvador como "un caso de injerencia comunista en el Tercer Mundo"; para ello comisionó —por cierto con poco éxito— a enviados especiales a Europa y a América Latina

para que convencieran a los aliados de la necesidad de que E. U. incrementara la ayuda para el gobierno dirigido por Duarte. Aunque el "Libro Blanco" ha producido reacciones de escepticismo de parte de la mayoría de los observadores, ha servido como justificación para el incremento sustancial de los abastecimientos militares hacia el Salvador.



El "Libro Blanco" en sí mismo muestra muchas de las características previamente citadas de la perspectiva de Reagan hacia Centroamérica. Proclama como evidente que ". . . en el curso del año anterior, la insurrección en El Salvador se ha ido transformando progresivamente en otro ejemplo de agresión armada indirecta contra un pequeño país del Tercer Mundo por potencias comunistas que actúan a través de Cuba" (p. 2). El documento presenta detalles de los esfuerzos de la guerrilla para obtener armamento de varios países "comunistas" y, concluye, que la existencia de éste prueba que, "la insurrección salvadoreña ha llegado a ser objeto de un compromiso a gran escala de países comunistas fuera de la América Latina" (p. 20).

Según el principio de Kennedy, la junta se caracteriza como un régimen cautivo entre la derecha y la izquierda que busca "el progreso con orden" (p. 18). Enfatiza el hecho de que su líder, Napoleón Duarte fuera en algún momento electo y otorga poca importancia al papel de los líderes militares dentro del gobierno (p. 16).

Durante la campaña electoral norteamericana hubo algunos desacuerdos dentro de los grupos de la derecha al interior de E.U sobre si los casos de Nicaragua y El Salvador eran similares y si el pluralismo en Nicaragua permitía que la ayuda norteamericana pudiera jugar un papel preventivo para detener una dominación "marxista-leninista" de la Junta o si ya era un caso "perdido" al comunismo. La decisión de suspender la ayuda representa el triunfo dentro del proceso de toma de decisiones de los sectores "duros" al interior de la burocracia. La retirada de la asistencia puede vindicar a estos "duros" con una *self-fulfilling prophecy*.

La nueva administración no ha perseguido una línea dogmática en todo su trato del Tercer

Mundo —el caso de Africa puede señalarse como ejemplo— pero América Latina y Centroamérica en particular parecen haber adquirido la categoría de *test cases* en una nueva política norteamericana de contención. Los desarrollos dentro de la propia región determinarán el contexto en que la administración Reagan deberá actuar, no obstante, una visión del mundo básicamente bipolar, aparentemente se impondrá.

México y Centroamérica

La primera cuestión que debe remarcarse cuando se discute el enfoque mexicano hacia los acontecimientos de Centroamérica es el persistente reclamo norteamericano de que existen realmente pocas diferencias entre los puntos de vista de ambos países. Estas consideraciones reflejan, más que nada, la costumbre diplomática de evitar discusiones públicas de toda una corriente de opinión que, con carácter oficioso, apunta que el gobierno mexicano está promoviendo un conjunto de políticas para consumo interno y otras para ser presentadas a puerta cerrada.

Esta cuestión ha sido poco discutida en la prensa mexicana, pero ha aparecido en algunas informaciones norteamericanas. James Nelson Goodsell, el experimentado y bien informado corresponsal del *Christian Science Monitor* ha escrito que "muchos mexicanos están reconsiderando profundamente el apoyo tácito de su país a la guerrilla izquierdista de El Salvador".⁵ Por lo demás, se dice que existen diferencias entre los núcleos políticos que se encuentran alrededor de López Portillo, quienes miran

⁵ *Christian Science Monitor*, 21 de enero de 1981, p. 4.

como inevitable, un triunfo de la izquierda en Centroamérica y se inclinan por aceptar los cambios en la región, con la esperanza de canalizar y moderar los sucesos y, otros sectores, especialmente los líderes militares y del mundo de los negocios, que observan con preocupación el hecho de que México pudiera "contaminarse" de los acontecimientos ocurridos más allá de su frontera sur.

Las noticias de maniobras militares del ejército mexicano, la concentración de tropas cerca de los límites con Guatemala y los pedidos de armas más sofisticadas son citados como prueba del argumento de que México podría, de hecho, manifestarse receptivo a la definición de Washington de la situación en Centroamérica, pero que ello no podría realizarse de manera pública.

Unicamente el gobierno mexicano puede decir si existen o no posibilidades para este género de acuerdos entre ambos países, pero hay buenas razones para creer que México y Estados Unidos se encuentran bastante lejos de un entendimiento con respecto a sus interpretaciones acerca de las realidades imperantes hoy día en el área centroamericana.

Ciertamente que México siempre ha pretendido evitar una identificación demasiado estrecha con Estados Unidos, a través del mantenimiento de algunas diferencias sumamente simbólicas frente a la política exterior de ese país. En el pasado, la negativa mexicana de apoyar el boicót de la OEA a Cuba, inspirado por Washington, fue un ejemplo famoso de esta postura. Sin embargo, las diferencias casi nunca han figurado como una cuestión de gran importancia en las relaciones entre los dos países y sólo ocasionalmente —como durante el sexenio de Echeverría— condujeron a respuestas negativas por parte del gobierno norteamericano o más signi-

ficativamente, de los inversionistas norteamericanos. No obstante, la crisis de Centroamérica tiene lugar en un contexto internacional muy distinto y en un momento en que México es más consciente de su status de "potencia emergente", que en ningún momento anterior en el pasado. La divergencia sustancial entre la posición mexicana respecto a la región centroamericana y la de la administración Reagan, podría constituirse en una problemática nueva en las relaciones bilaterales.

Los puntos de vista de México sobre esta cuestión, han sido señalados por López Portillo en varias ocasiones y en numerosos foros. Aún antes de la toma de posesión de Reagan, el presidente mexicano advertía los peligros que implicaba una intervención en el área. Los tres señalamientos básicos que se pronuncian con mayor frecuencia son: la no intervención, el derecho a la autodeterminación de los pueblos y la necesidad de que el pueblo de El Salvador ejerza este derecho. Como apunta el Secretario de Relaciones Exteriores, Jorge Castañeda ante Naciones Unidas en septiembre de 1980:

Para orientar nuestra acción en Centroamérica hemos tenido presente las siguientes consideraciones: 1) el reconocimiento de que la nueva situación en el área es resultado de la legítima lucha de los pueblos para transformar arcaicas y anacrónicas estructuras de poder y dominación, 2) la defensa del derecho de los pueblos a darse la forma de organización política, económica y social que mejor corresponde a sus aspiraciones. . .⁶

⁶ Véase en Olga Pellicer de Brody, "La política de Ronald Reagan hacia México; la difícil recuperación de la buena vecindad", en *Cuadernos Semestrales*, No. 9, C.I.D.E., México, Primer Semestre, 1981, p. 265.

Este énfasis en la necesidad de cambio en las estructuras básicas de la economía, la política y la sociedad —un cambio efectuado en México con La Revolución de 1910— se contradice con la perspectiva del equipo de Reagan subrayada anteriormente. En una entrevista para la cadena de televisión norteamericana CBS, en marzo del presente año, López Portillo argumentó que El Salvador estaba experimentando “una auténtica lucha de clases, como la que vivió México a principios del siglo”, que finalmente llegará a la meta de todas las revoluciones: “institucionalizar sus propósitos o, en otras palabras, crear un Congreso constituyente para acordar libremente cómo quieren vivir y convivir”.⁷

Al contrario de Estados Unidos, México ha tenido una larga tradición de convivir exitosamente con los movimientos progresistas tanto en política interna, como en el plano internacional. Como Olga Pellicer hiciera notar, México ha seguido, cuando menos hasta ahora, un efectivo programa de control político “. . . a través de los organismos de masas afiliados al partido oficial, el hábil manejo de la movilización ideológica, una bien dosificada presencia militar y la posibilidad— ampliada por la presencia del petróleo— de llevar adelante proyectos de desarrollo que mantienen viva la esperanza en una mejoría general del nivel de vida”.⁸

A nivel internacional, las relaciones mexicanas con gobiernos revolucionarios como Cuba, Chile y Nicaragua, han parecido incluir siempre un entendimiento tácito referente a que México, no sería en sí

mismo, objeto de proselitismo revolucionario. Tanto esta situación, como la historia mexicana de las intervenciones de Estados Unidos podrían explicar el porqué López Portillo ha señalado que México considera a las ideologías, menos peligrosas que la intervención: “una ideología se puede debatir, pero la intervención sólo con la fuerza se puede evitar”.⁹

De hecho, a diferencia de Estados Unidos que, teniendo relativamente pocos intereses económicos en Centroamérica, aún tiene miedo de la pérdida de sus inversiones si llegaran al poder regímenes marxista-leninistas, México probablemente se beneficiaría en términos económicos si se instalaran gobiernos “progresistas”.

A través del Convenio de San José, por medio del cual México y Venezuela se comprometieron a satisfacer en su totalidad el abastecimiento de petróleo de los países centroamericanos, el primero ha encontrado un importante mercado potencial que hasta ahora no ha sido bien aprovechado. El 30% de tales ventas se hará con términos muy favorables de crédito, que pueden ampliarse a través de la contratación de proyectos de desarrollo económico mexicanos diseñados para Centroamérica. Es precisamente en aquellos países “progresistas”, que más preocupan a Estados Unidos, donde estos arreglos previstos por el Convenio de San José están prosperando.¹⁰ El papel rector en la economía que ha desempeñado tradicionalmente el Estado mexicano ha preparado a este país para esta clase de acuerdos de cooperación Estado-capital privado, con los cuales dichos gobiernos progresis-

⁷ *Uno más uno*, 18 de marzo 1981, p. 1.

⁸ Pellicer, Olga, *op. cit.* p. 266.

⁹ *Uno más uno*, *op. cit.* p. 1.

¹⁰ Pellicer, Olga, *op. cit.* p. 268.

tas se sienten más satisfechos. Así, en vez de lamentar los cambios que están ocurriendo en el área centroamericana, México tiene más elementos para adelantarse a los desarrollos que la política norteamericana está tratando de prevenir.

Debido a una serie de experiencias ligadas a su desarrollo político interno, a su experiencia internacional con gobiernos revolucionarios y a la tradi-

ción de promover la participación del sector público en la esfera económica, México parece preparado para seguir una línea hacia Centroamérica con posibilidades de entrar en conflicto con la que actualmente sigue Estados Unidos.

No obstante los señalamientos de López Portillo en el sentido de que México no se opone "con arrogancia" a Estados Unidos y que no quiere tener



problemas con su "poderosísimo vecino",¹¹ existen serios conflictos potenciales entre los dos países con referencia a Centroamérica. Estos conflictos pueden ser exacerbados o resueltos de acuerdo a los cambios que se lleven a cabo al interior del área, de la política doméstica mexicana o de la política exterior norteamericana hacia Centroamérica.

La coyuntura actual en El Salvador y Nicaragua

A partir de diciembre de 1980 se ha observado un proceso de reajustes políticos internos en El Salvador y Nicaragua. Indudablemente vinculados a los cambios ocurridos en Estados Unidos a partir de la elección de Ronald Reagan y con ella del triunfo de los planteamientos de "contención" en política exterior, estos acontecimientos tienen como sustento la necesidad de reforzar, aunque con propósitos diferentes, las posiciones gubernamentales al interior de sus respectivos países.

En El Salvador, la Junta de Gobierno que ascendiera al poder a fines de 1979 enfrentaba serias dificultades debido a su creciente aislamiento político. Este régimen, que resultara de una alianza —inusitada para el contexto salvadoreño— entre sectores militares considerados "moderados", la democracia cristiana, la socialdemocracia (Movimiento Nacional Revolucionario) y el Partido Comunista (Unión Democrática Nacionalista), había perdido en el transcurso del tiempo estas bases de apoyo, quedando reducida la participación de los civiles en el gobierno a un pequeño sector de la democracia cristiana. La imposibilidad de llevar a la práctica el programa de reformas propuesto originalmente

(que incluía básicamente los rubros financiero y agrario) y de ejercer un control efectivo sobre las acciones de sectores de las fuerzas armadas vinculados más de cerca con la dinastía militar —que se mantuviera en el poder desde la década de los treinta— serían los elementos fundamentales que llevarían a este creciente distanciamiento.

La posibilidad de diálogo de la Junta con las grandes organizaciones de masas (Buró Popular Revolucionario, por ejemplo), los sindicatos (Federación Nacional de Trabajadores Salvadoreños) o inclusive con algunos núcleos de los movimientos armados, que existiera en los primeros momentos, se fue paulatinamente desdibujando, con el agravante que sobre éstos últimos grupos, recaerían las acciones represivas militares y paramilitares.

La inestabilidad generada por estos acontecimientos se manifiesta en las crecientes dificultades para recrear un "clima de confianza" para la inversión privada, que se tradujera en una recuperación económica. Así un creciente número de grupos vinculados a la actividad privada han pasado de mantener una actitud expectante a manifestarse directamente hostiles al régimen actual.¹²

Este es el contexto en que cualquier medida por parte de la Junta sería puesta en práctica. En este sentido se realizan cambios en diciembre de 1980. Napoleón Duarte, la figura principal de la Democracia Cristiana, promueve la disolución de la Junta, asumiendo él mismo las tareas ejecutivas y

¹¹ *Uno más uno, op. cit.* p. 1

¹² *Este es el caso de una de las más importantes asociaciones de empresarios, Alianza Productiva, pero existen otros como el de Movimiento Pro Paz y Trabajo que hacia fines de 1980 apuntaba "los gobernantes están acorralados, con la llegada de Reagan es posible plantear otra alternativa, no se hizo antes porque Washington lo censuraba", véase ALAI, Montreal, 27 de noviembre de 1980, p. 1.*

apoyando al coronel Abdul Gutiérrez para que ocupara la vicepresidencia. Esta última medida parece estar vinculada al hecho de que con posterioridad a este nombramiento, Gutiérrez obtenía el "voto de confianza" de oficiales y cuadros militares para hacerse cargo de la dirección de las fuerzas armadas. La primera de las pruebas que enfrentara esta recomposición gubernamental fue la resistencia a la ofensiva llevada a cabo por el Frente Democrático Revolucionario en febrero de 1981, su "éxito", cuando menos en el corto plazo, contribuirá a recomponer su imagen de fuerza en el exterior.

Estos acontecimientos reducirán la incertidumbre del gobierno salvadoreño acerca de la actitud que la nueva administración republicana asumiría, ya que existen varias posibilidades: desde que se favoreciera una intervención directa hasta que se apoyara la creación de un gobierno "autoritario" de corte militar,¹³ para evitar la "pérdida" de El Salvador. Pero aún una disminución de la asistencia económica o de seguridad en un marco de apoyo al régimen de Duarte, podía significar un golpe definitivo.¹⁴

En los meses que han transcurrido desde el ascenso de la administración Reagan, las propues-

¹³ Después del triunfo electoral de Reagan, Duarte viajó secretamente a Washington, con miras a contrarrestar la influencia de sus opositores de derecha en el nuevo gobierno norteamericano. Véase "Storm over El Salvador" en *Newsweek*, March 16, 1981, pp. 8-11.

¹⁴ Acerca de la gravedad de la situación económica salvadoreña, pueden consultarse, "El Salvador's civil war and the illusions of bloodshed" en *Financial Times*, Londres, March 25, 1981, p. 5; así como "Private sector prepares a knife for President Duarte's back" en *Latin American Weekly Report*, Londres, March, 27 1981, pp. 6-7.

tas en el campo de la asistencia, parecen indicar que, cuando menos en el corto plazo, se continuará favoreciendo el régimen actual. Sin embargo, posiblemente en previsión de que en el futuro, el enfrentamiento social, en el que el actual régimen se encuentra inmerso, llegara al extremo de revocar esta tendencia, Duarte ha dado algunas muestras de su disposición al diálogo con interlocutores "confiables", como la socialdemocracia. La respuesta no ha sido positiva, el proceso de unificación de la oposición expresado a través del Frente Democrático Revolucionario, si bien dista de estar acabado, tampoco favorece la opción de llevar a cabo "pláticas selectivas". Algunos voceros del Frente han rechazado explícitamente esta propuesta, señalando que habría mayor interés en apoyar un diálogo directo con el gobierno norteamericano o alguna forma de mediación con la participación de la Internacional Socialista o de países como México, que en el contexto latinoamericano, ha sido junto con Nicaragua y Cuba, el país que le ha manifestado su simpatía.

Por lo que se refiere a Nicaragua, a más de un año de gobierno, la Junta encara problemas tanto a nivel de la reconstrucción económica como de sobrellevar los conflictos con los sectores vinculados al capital privado. Dicha reconstrucción, considerada como una prioridad por los distintos grupos sociales que participaron en la amplia movilización antisomocista, se ha convertido en un objeto de controversia. La creación de un esquema de "economía mixta" significaba la consolidación de la participación gubernamental en actividades económicas, (que en su conjunto suman un 40% del PNB) a través de programas de nacionalización y de regulación estatal de actividades básicas. Si bien en este marco se llevaron a cabo medidas como un

modus vivendi con 40 empresas —seleccionadas entre aquéllas que proporcionaban mayor cantidad de empleos o fueran productoras de artículos básicos o de exportación— con el propósito de canalizar estímulos fiscales o financiamiento hacia ellas de manera preferencial, la reacción de los círculos empresariales no ha sido positiva. Ellos aducen constantemente la existencia de un clima de inseguridad

que inhibe sus posibilidades de participar en el proceso productivo.

Los problemas planteados por estos sectores —que en la práctica se expresan a través de la disminución de las inversiones y de medidas de descapitalización— no se encuentran fundamentados solamente en las acciones propiamente económicas del gobierno, sino que rebasan este marco para inser-



tarse en el contexto de las disputas políticas. Es decir, si bien en los primeros meses de este año han resaltado los enfrentamientos en torno a la consecución de los lineamientos del programa económico para 1980¹⁵ los momentos especialmente conflictivos aparecieron durante el primer semestre del año anterior, al constituirse el órgano legislativo del régimen: el Consejo de Estado.

Para ese momento, la consolidación del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en posiciones gubernamentales importantes (reestructuración gubernamental de diciembre de 1979) y su apoyo a organizaciones de masas como la Central Sandinista de Trabajadores y la Asociación de Trabajadores del Campo; al lado de medidas como la campaña de alfabetización, se venían manifestando como puntos conflictivos frente a los antiguos sectores antisomocistas no incorporados al FSLN. En esta situación, el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) y el Movimiento Democrático Revolucionario, entre otras organizaciones, expresaron protestas por su inadecuada representación dentro del nuevo organismo legislativo. La renuncia de Alfonso Robelo —miembro de la Junta— como respuesta a estos hechos conduciría a una seria crisis política (Violeta Chamorro, la otra representante de una línea “moderada” dentro de la Junta había renunciado con anterioridad) y a la aparición en la escena política nicaragüense de una opción distinta al sandinismo alrededor de la figura de Robelo. Los nombramientos de dos personajes no vinculados directamente con el FSLN, para llenar las vacantes dentro de la Junta, como sería el caso de Rafael Córdova Rivas y de Arturo Cruz, así como

la promulgación de disposiciones para “garantizar” la propiedad privada, contribuirían a mitigar el nivel de las tensiones.

En el desarrollo de estos acontecimientos internos, los vínculos del gobierno nicaragüense con el exterior, revestían particular importancia. Se habían obtenido varios préstamos a través de canales bilaterales y multilaterales. México y Venezuela desempeñaban el papel de abastecedores de petróleo a precios especiales.¹⁶ Sin embargo, la asistencia norteamericana resultaba de vital importancia tanto en sí misma, como por representar el aval necesario para mantener contactos con organismos internacionales y con empresas extranjeras que operan en Nicaragua.

Dentro de este cuadro, la decisión de Reagan de suspender indefinidamente la asistencia económica, aduciendo la participación de Nicaragua en el envío de armas a El Salvador, incidirá de manera importante en los recambios llevados a cabo al interior del gobierno. Ello sería observado en la transformación de la Junta en un triunvirato coordinado por Daniel Ortega e integrado a un órgano colegiado más amplio: Consejo de Gobierno, así como en la elección de Arturo Cruz, quien contara con amplia experiencia de su época como funcionario del Banco Internacional de Desarrollo, como embajador en Washington.

En el futuro desarrollo de los acontecimientos en El Salvador y Nicaragua, un elemento también importante es la actitud que asumen los países del área centroamericana. En el momento actual, los distintos regímenes del área parecen llevar a la prác-

¹⁵ Véase, “¿Qui est responsable de la crise économique?”, *Le Monde*, París, abril 3, 1981, p. 3.

¹⁶ Al respecto puede consultarse el Convenio de San José, firmado en esa ciudad el 3 de agosto de 1980.

tica, con distintos matices, su propia interpretación del "peligro comunista" en la zona y alrededor de esta tendencia han hecho girar sus lineamientos respecto a los dos países. En este sentido Guatemala y Honduras son los países que han asumido mayores posiciones de compromiso para apoyar al actual régimen salvadoreño, inclusive este último habría llevado a cabo acciones conjuntas con el ejército de ese país. En la misma línea se encontrarían países como Costa Rica y Panamá, aunque estos gobiernos, —siguiendo la línea de planteamientos expresados por Venezuela o algunos otros del Pacto Andino—, hayan justificado su apoyo al gobierno de Duarte, a través del argumento de que éste constituye la única opción "centrista" para el país. La contraparte de esta defensa hacia El Salvador respaldada por el propósito de "contención del comunismo", se manifiesta en actitudes que van del escepticismo a la hostilidad hacia el proceso nicaragüense después del triunfo de la revolución sandinista. En este sentido, Honduras, por ejemplo, ha recibido acusaciones directas por parte de voceros de los ministerios de Defensa y del Interior de Nicaragua por permitir la existencia de campos de entrenamiento para exguardias somocistas que buscan el derrocamiento del régimen.¹⁷

El conjunto de elementos presentados anteriormente están profundamente vinculados con las posibilidades futuras de consolidación de los regímenes de El Salvador y Nicaragua. Sin embargo,

¹⁷ En relación a las posiciones de varios países del área centroamericana frente a los acontecimientos de Nicaragua y El Salvador véanse, "La actual situación en El Salvador" y "El Salvador la 'solución' militar de la derecha" en *ALAJ*, Montreal, 19 de diciembre de 1980 y 13 de febrero de 1981.

las diferencias existentes entre los dos procesos y fundamentalmente entre las dos sociedades, les ofrecen posibilidades distintas. Por un lado, la polarización creciente de los grupos políticos en El Salvador derivada de una sociedad especialmente inequitativa en cuanto a la distribución del ingreso, con un alto grado de cohesión de los sectores vinculados al capital privado, ofrece mayores retos no sólo al presente régimen sino a las organizaciones populares, que han estado luchando por su derrocamiento. En este cuadro, el elemento del respaldo externo tanto económico como militar pareciera ser el elemento clave para el mantenimiento, cuando menos en el corto plazo del gobierno actual de Napoleón Duarte. Por otra parte, la situación nicaragüense, derivada de la amplia alianza social, que se constituyera con el propósito de derrocar a Somoza, presentará mayores posibilidades de respuesta a los problemas que derivados de la aplicación del esquema económico y de la consolidación en el poder del FSLN. Sin embargo, su futuro estará vinculado con el respaldo que reciba del exterior, aunque de manera fundamental con el desarrollo y expansión de sus bases internas de apoyo, principalmente de las organizaciones de masas vinculadas al sandinismo.

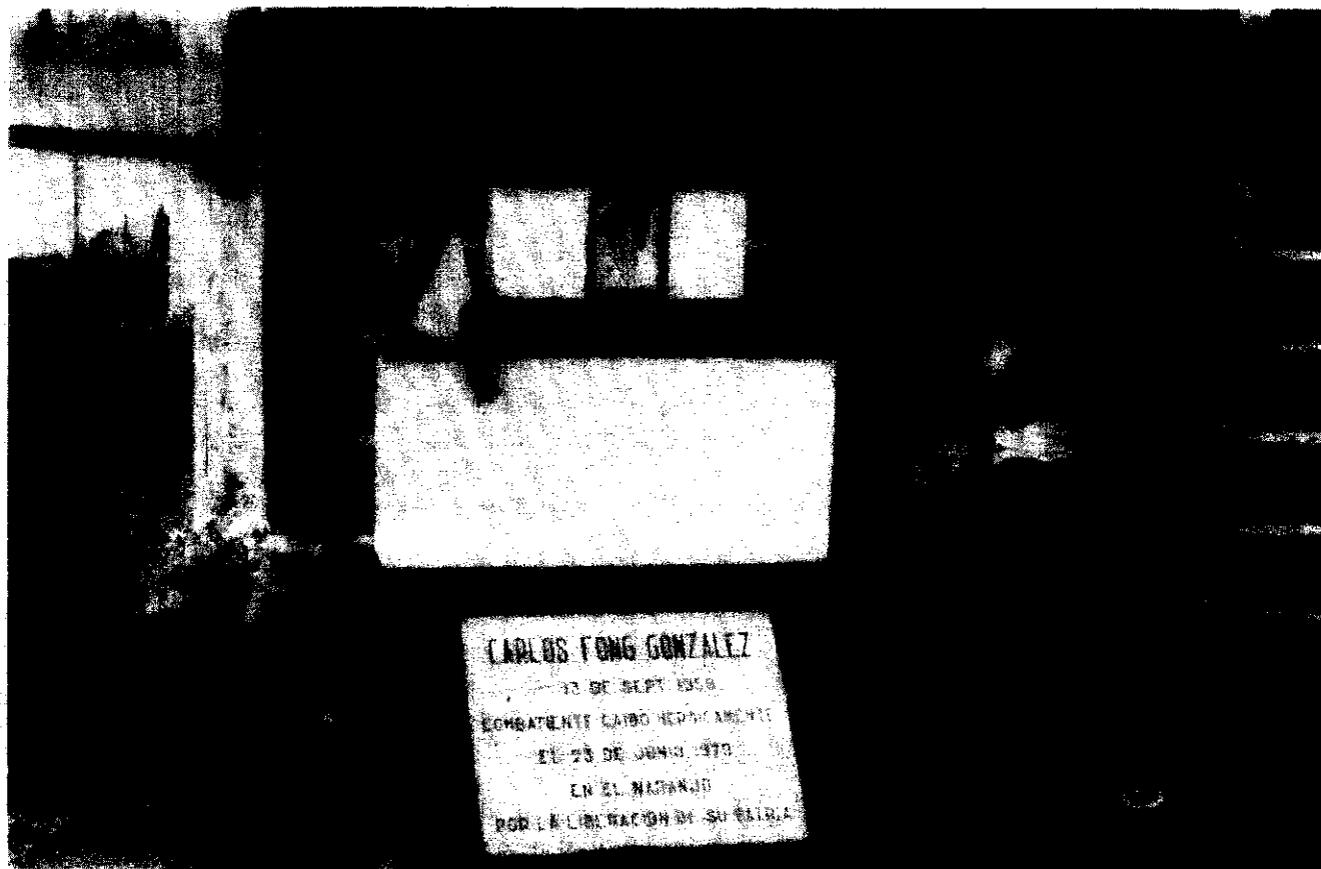
Los conflictos triangulares

Habiendo señalado elementos que ilustran las posiciones de Estados Unidos y México respecto a los acontecimientos más conflictivos del área centroamericana: El Salvador y Nicaragua, pueden plantearse algunas respuestas, en torno a las contradicciones actuales y aquéllas que podrían manifestarse en el futuro, por la existencia de diferencias en la interpretación de los sucesos ocurridos en esa área.

Nos centraremos en las posiciones norteamericanas debido a las mayores posibilidades de este país, ante la consideración actual de que sus intereses estratégicos se encuentran amenazados, de aplicar un esquema más amplio de opciones de política. Frente a algunas de ellas, las posibilidades de confrontación con las posturas mexicanas son más altas que en otras, aunque esto no siempre se refleje en

un mayor abanico de respuestas para el gobierno de México.

En el momento actual, Estados Unidos se ha mostrado partidario de poner en práctica acciones unilaterales en relación a los casos de El Salvador y de Nicaragua —aunque no ha cerrado la posibilidad de llevar a cabo otras de diferente índole—, caracterizadas por la utilización de canales indirectos.



tos de incidencia en el proceso político de ambos países.

Con relación a El Salvador, la administración republicana ha mantenido la tendencia, que se observara desde 1979, de incrementar la asistencia (para el año fiscal de 1981, se han programado 162.9 millones de dólares); específicamente, en relación al rubro de seguridad, Reagan ha propuesto la destinación de un total de 66 millones de dólares, de los cuales 25 se dirigirán a la compra de armamento, 1 a gastos de entrenamiento y los 40 restantes a apuntar el déficit presupuestario (a través del llamado Fondo de Apoyo Económico, ESF). Estas cifras resultan más significativas, a la luz de la consideración del conjunto de las mismas destinadas a la región latinoamericana. Desde este punto de vista, la asistencia militar hacia El Salvador alcanza casi un tercio del total. Independientemente de la concesión de esta ayuda, Washington está apoyando al régimen salvadoreño, a través de cuando menos 54 boinas verdes (según datos del Libro Blanco) "no combatientes", encargados de impartir "teoría y práctica" militar.

La postura mexicana en el caso salvadoreño se ha caracterizado por enfatizar de manera constante el principio de no intervención, así como por manifestar su disposición a fungir como mediador entre el gobierno de Duarte y la oposición organizada en el Frente Democrático Revolucionario. Si bien el primero no ha reaccionado de manera explícita a la propuesta (posiblemente en consideración de las ventajas que ofrece el Convenio de San José en relación a las compras de petróleo), el FDR ha dejado entrever su disposición a aceptar el ofrecimiento mexicano.

Teniendo en consideración estos elementos, puede observarse que las relaciones entre Estados

Unidos y México, en el transcurso del presente año no se han visto fundamentalmente afectadas, por las diferencias de sus puntos de vista respecto a los acontecimientos de El Salvador. En este sentido, si el gobierno salvadoreño lograra mantenerse en el poder gracias al respaldo norteamericano, habría pocas posibilidades de que las relaciones mexicano-norteamericanas empeoraran. Sin embargo, si la movilización al interior de El Salvador, patrocinada por las distintas organizaciones en este momento aglutinadas en el FDR, lograra mayores posibilidades de llevar a la práctica un triunfo militar, la actual administración norteamericana tendrá que considerar otras opciones que podrían producir algunos escenarios de conflicto en las relaciones con México.

Entre estos escenarios, existen varios que aparecen con mayores posibilidades de presentarse en la realidad. El primero estaría constituido por la intervención directa y unilateral por parte de Estados Unidos. En este caso, si Washington lograra una acción militar rápida que condujera a una victoria en este terreno, parecería que México no tendría posibilidades de revertir estos hechos y tendría que limitarse a realizar una condena explícita de los mismos. Sin embargo, si la intervención norteamericana implicara una lucha larga al interior de El Salvador, el gobierno mexicano se vería más comprometido a definir su posición en relación al carácter que debiera presentar el futuro régimen salvadoreño.

En esta situación el contenido de las opciones que México podría manejar, revisten a nuestro juicio un carácter amplio, aunque algunas de estas apenas rebasarían el campo de lo simbólico. Entre ellas se encuentra un posible anuncio de cancelación del porcentaje de las ventas mexicanas de petróleo,

destinado a cubrir casi la totalidad de las reservas estratégicas norteamericanas de este energético. Esta decisión junto con otras medidas orientadas a “congelar” algunos programas de cooperación bilateral (tráfico de drogas, por ejemplo), —aunque fuese sólo temporalmente, podrían contribuir a entorpecer el proyecto de Reagan de recuperación de la “buena vecindad”, que tendría algunas repercusiones negativas a nivel de la política interna norteamericana. Todas estas opciones significarían, además, desde la óptica mexicana, un resurgimiento nacionalista y la renovación en el discurso político del propósito de búsqueda de un camino autónomo para el desarrollo económico del país.

En este contexto, si el actual gobierno de México, optara por continuar apoyando al FDR debería asumir el costo de enfrentar posibles críticas por parte de grupos militares y otros vinculados al capital privado, que ya en el momento actual manifiestan su temor a una posible “contaminación” —coincidiendo en esto con algunos asesores de la administración Reagan— que derivará en una amenaza a la tradicional estabilidad del sistema político mexicano. Sin embargo a nuestro juicio, el grado de autonomía relativa que el régimen de López Portillo ha logrado recuperar en el campo de la política exterior, así como el hecho que haya vinculado la imagen progresista de ésta, a su interpretación del proceso salvadoreño, tendrán que derivar en el mantenimiento de su postura actual. En el próximo sexenio, existirán mayores posibilidades de cambiar la línea hacia El Salvador, aunque no se tiene noticia si los sectores mexicanos más preocupados por esta posible “contaminación” han incidido o incidirán en el nuevo gobierno, respecto a este tema.

Otra de las opciones de la actual administración norteamericana, que no puede descartarse como

escenario de conflicto, es la puesta en práctica de una intervención de carácter multilateral en El Salvador, seguramente en el marco de la OEA. Dicha opción ya se habría intentado sin éxito durante el gobierno de Carter, en virtud de que los países de América Latina presentaban planteamientos divergentes al respecto y no lograron llegar a un acuerdo. Esta tendencia se manifiesta hasta estos días, con el agravante de que la creciente polarización de la lucha política en El Salvador la presenta aun más difícil de aceptar.

Como parte de sus esfuerzos para distinguir el caso de El Salvador de el de Vietnam, la Administración misma y algunos medios de comunicación han dejado entrever otra opción: la retirada de la ayuda norteamericana, en caso de que pueda mantenerse el gobierno de Duarte; esto implicará la aceptación del triunfo de la guerrilla o la búsqueda de un convenio negociado entre los combatientes. Esta política necesitaría obviamente la participación de mediadores vistos con buenos ojos por ambos lados, es decir, Venezuela y México. Aunque éstos han adoptado distintas posturas hacia El Salvador— el presidente venezolano es demócrata-cristiano como Duarte— parecen coincidir en su deseo de resolver el conflicto pacíficamente; México, especialmente, ha llevado a cabo durante las últimas semanas un esfuerzo para actuar como mediador.

Esta opción, para cumplirse, necesitaría de buenas relaciones entre México, Venezuela y E.U. y, de realizarse podría conducir a un acercamiento muy estrecho entre las políticas exteriores mexicanas y norteamericanas. Sin embargo, esta opción requiere de la creencia —no muy posible— de que la administración Reagan aceptará la derrota de su política dura hacia la “amenaza comunista” en El Salvador y también la idea— tan extraña para ella—

del pluralismo ideológico. Esta opción, entonces, presenta muchas ventajas, pero carece de una base sólida en la práctica concreta de la administración.

Desde el punto de vista de la administración Reagan, los acontecimientos en El Salvador están profundamente vinculados con la situación en Nicaragua. Así, los argumentos esgrimidos para iniciar una política de hostigamiento hacia este último país, se encuentran vinculados básicamente con su presunta participación en el envío de armamento para los grupos armados salvadoreños. Este juicio de parte del gobierno de Estados Unidos, plasmado en cifras, significa la retención de 15 millones de dólares del paquete de 75 concedidos para 1980; además de 50 en asistencia económica y 9.6 para la compra de granos aprobados para 1981.

La puesta en práctica de estas medidas en contra del gobierno nicaragüense, está vinculada a la elección de la opción de intervención indirecta por parte de Washington. Ello significaría el apoyo de intentos de desestabilización "a la chilena", es decir a una política que va más allá de llevar a cabo cortes en la asistencia económica bilateral e incidir negativamente en la concesión de líneas de crédito por parte de las organizaciones financieras internacionales y que apoya acciones cubiertas de la CIA, aprovechando el clima de opinión pública favorable existente hoy día en Estados Unidos. Como un elemento importante de esta opción de intervención indirecta se encuentra el apoyo a antiguos oficiales somocistas, para la creación de campos de entrenamiento tanto en territorio norteamericano —aunque éstos aún no cuentan con el respaldo oficial—, como en el de países centroamericanos vecinos, con el propósito de que eventualmente ingresaran a Nicaragua y retomaran el poder.

La línea de desestabilización incidirá en una realidad con críticos problemas económicos, unos heredados del pasado y otros derivados de la aplicación de un esquema de "economía mixta"; así como en un régimen, que al plantearse un pluralismo ideológico, no ha consolidado aún una hegemonía política. En este sentido parecería que esta línea podría convertirse en "exitosa" desde el punto de vista de los intereses norteamericanos. Sin embargo, el problema es más complejo y, la opción de Washington, enfrentará "dificultades", en razón del alto nivel de movilización que ha logrado mantener el Frente Sandinista, apuntalada fundamentalmente a través de la consolidación de grandes organizaciones de masas y la creación de fuerzas armadas, cuyos mecanismos pueden ser accionados en caso de peligro. Por lo demás, conviene recordar que la aplicación de estos lineamientos negativos por parte de Washington al régimen de Nicaragua han sido condenados —e inclusive han intentado ser contrarrestados— por gobiernos europeos vinculados a la Internacional Socialista y, en el plano de América Latina, por el mexicano.

En relación con México, este país se ha comprometido con el proyecto del FSLN con anterioridad al derrocamiento de Somoza. Con posterioridad, su respuesta a la opción implementada por Estados Unidos hacia Nicaragua ha sido la continuación de la puesta en práctica de medidas de apoyo económico, tanto directas (asesoría en el campo de petróleo, fertilizantes, telecomunicaciones, pesca, transportes y educación; así como el incremento en las compras mexicanas de azúcar, carne, oro), como indirecto ("mediación" en el proceso de renegociación de la deuda pública externa). Esta actitud parece que permanecerá, sin mayores cambios, en el transcurso de la última etapa

del régimen de López Portillo. La inexistencia de un fuerte cuestionamiento al respecto por parte del capital privado mexicano se presenta como un elemento que alienta esta situación y al que se suma su posible interés en participar en el proceso de reconstrucción económica de Nicaragua, a través de las facilidades que ofrece, por ejemplo, el convenio de San José.

El desarrollo de los acontecimientos en Nicaragua, hasta el momento actual no han afectado sustancialmente las relaciones entre Estados Unidos y México. Sin embargo, en el futuro, el "éxito" de

la desestabilización del régimen sandinista, sí podría acarrear conflictos a nivel de la relación bilateral. México tendría que reafirmar sus posiciones respecto a Nicaragua, aunque con costos políticos menores en el ámbito doméstico —si comparamos esta misma acción en el caso de El Salvador—. Las posibles respuestas gubernamentales estarían dirigidas en contra del nuevo régimen nicaragüense a través de la suspensión de los vínculos existentes. En esta situación, el gobierno norteamericano tendría que asumir un rol mayor para mantener la viabilidad económica y política de ese nuevo régimen. 